

EL DÍA

Un Nuevo Crimen Contra la Libertad de Prensa

por Gerónimo RAGAZZI

El crimen de Alfredo Ongaro, hijo del destacado dirigente sindical argentino Raimundo Ongaro —ex secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) de ese país— ha conmocionado a los hombres de prensa de Argentina y se suma a los antecedentes que señalan el deterioro creciente de la libertad informativa nacional.

La muerte del joven Ongaro, virtualmente fusilado a los 21 años, señala algo más que nuevo testimonio de la violencia derechista que con absoluta impunidad se cobra actualmente un promedio de 6 víctimas diarias. Este asesinato ratifica la determinación de un poderoso grupo político, que actuando —según las denuncias de todos los partidos de oposición— al amparo del régimen, intenta encauzar el futuro del país por los tortuosos caminos del fascismo.

Raimundo Ongaro, líder de la Federación Gráfica Bonaerense, se encontraba prisionero en la cárcel de Villa Devoto desde diciembre de 1974. El gobierno de la presidente Isabel Martínez decidió prolongar su reclusión —a pesar de que la justicia desestimara los cargos que le imputó la policía— instrumentando en contra del sindicalista la vigencia del estado de sitio.

Oportunamente, la prensa ya analizó las implicaciones del arresto de Ongaro: se trató —entonces— de una medida represiva destinada a neutralizar la resistencia sindical de los obreros gráficos, cuya Federación fue "ilegalizada" al fracasar el gobierno en sus intentos de dividirla y controlarla.

En Argentina los obreros gráficos mantienen una férrea unidad con los trabajadores de la información: gráficos y periodistas configuran un frente político de tradicional raigambre democrática. No es una "casualidad" que el año pasado —después de la muerte del general Perón— hayan sido intervenidas sus 2 organizaciones sindicales (entre otras muchas): la Federación Gráfica —cuyo caso mencionamos en un párrafo anterior— y la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (APBA).

Gráficos y periodistas han marchado juntos en los últimos años. Juntos en la reivindicación social y salarial; juntos en el enfrentamiento político de sucesivas dictaduras militares. También juntos, actualmente, frente a la ola de violencia nunca esclarecida que ha cercenado la vida de una docena de periodistas, demolido con bombas media docena de periódicos y amenazado de muerte a decenas de trabajadores de ambos oficios.

La violencia fascista tiene en Argentina una misión clara: intimidar a la población y silenciar a las voces democráticas. El secuestro y tortura de la periodista peronista Ana Guzetti —que el año pasado le denunció personalmente al general Perón el carácter parapolicial de las bandas derechistas—, produjo de inmediato la reacción de la "ilegalizada" APBA. El resultado ha sido una serie de huelgas escalonadas de los trabajadores de la información, y —como siempre— junto a ellos los obreros gráficos.

El asesinato de Alfredo Ongaro —sin duda— una represalia contra su padre: insobornable militante democrático al que ni siquiera la prisión ha silenciado. El reclamo, la movilización popular que exige la localización de Ana Guzetti, ha llevado a esas mismas bandas que denunció la periodista a tomarse venganza en la persona de un dirigente sindical.

Ayer mismo se han cometido 5 crímenes políticos en Argentina. Las víctimas han sido activistas políticos y sindicales de izquierda. En todos los casos la intención —y en esto concuerdan los observadores políticos argentinos de diversas tendencias— ha sido desarrollar o acrecentar el terror que impera en la vida cotidiana, para acallar toda protesta. El joven Ongaro —militante popular como su padre— podría figurar entre esas víctimas por mérito propio; al igual que los centenares de jóvenes argentinos asesinados en los últimos meses; sin embargo, su muerte se relaciona directamente con la supervivencia de una de las libertades más elementales de la **democracia: la de prensa.**